

te el juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Estéban Salaices, contra el presidente de la asamblea municipal de San Juan del Mezquital, que ha hecho efectivo un acuerdo del ayuntamiento, en virtud del cual se le privó de un terreno de su propiedad, perteneciente al sitio de Jalpa, adjudicándosele al secretario del referido ayuntamiento conforme á las leyes de reforma, alegando el peticionario que con esta providencia se violan en su persona las garantías que otorga el art. 27 de la Constitución general de la República. Vistas las constancias de autos y

Considerando: que el promovente ha presentado al juzgado de Distrito que conoce del recurso, los títulos primordiales que acreditan la propiedad particular del terreno del cual está en quita y pacífica posesión: que la autoridad ejecutora no contradice los hechos, pero alega que la asamblea municipal ha fundado su acuerdo en que dichos terrenos los considera como pertenecientes al municipio y amortizados por el pueblo en comun, debiendo en consecuencia procederse á cumplir con la circular de 9 de Octubre de 1856.

Considerando: que si los títulos de propiedad particular en virtud de los cuales vienen conservando separadamente la tenencia como propiedad particular por mas de un siglo los vecinos de San Juan del Mezquital, entre los que se encuentra el peticionario, adolecen de algun vicio, la asamblea tiene su derecho á salvo para hacerlo valer en la vía y forma prescrita por las leyes; con fundamento del art. 27 de la Constitución federal se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Zacatecas, que declaró en nombre de los poderes de la Union que amparaba y protegía al peticionario contra el acuerdo de la asamblea municipal de San Juan del Mezquital ejecutado por su presidente, por el que fué despojado de la propiedad y posesión que el expresado Salaices tiene en el sitio de

Jalpa, y que fué adjudicado al secretario de la misma asamblea C. Ramon Chavez, por haberse violado en el acuerdo y su ejecución la garantía que protege el art. 27 de la Constitución general.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de este fallo, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*P. Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Arza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Altamirano.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Setiembre veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por Mauricio Victoria y Atanacio Carrera, por violacion de las garantías que otorgan los artículos 13, 20 y 21 de la Constitución federal.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 1º suplente de Distrito:

Una ley de suspension de garantías es la mas antilógica en cualquier pais y en cualquier tiempo; pero mas en el actual, en que los derechos del hombre se tienen como el principio fundamental de todo código político, y la alteracion ó trasgresion de tan sagrado principio es insostenible ante toda moral, contrario á todas las leyes, digo nociones de justicia, y sin explicacion posible

á los ojos de la civilización y progreso á que la humanidad ha llegado en la época presente.

Mientras el ciudadano cumple por su parte con las obligaciones que la sociedad le impone, justo y natural es que ella cumpla por la suya con los deberes que tiene hacia el individuo; pero el criminal que por su plena deliberación se pone fuera de ese círculo de obligaciones recíprocas, ¿con qué derecho puede reclamar las que le son favorables? la sociedad desde ese momento no está obligada á guardar consideraciones á su enemigo doméstico, y sería un absurdo exigir de ella que respetara la libertad, la propiedad ó la vida de tal enemigo.

Todo lo que tiene de odioso la suspensión de garantías generalmente hablando, tiene de racional y justo cuando se impone como coacción en una ley prohibitoria, principalmente cuando ésta se refiere á crímenes odiosos; y la pena de muerte, es decir, la suspensión del mas hermoso derecho, viene á ser justa desde que el individuo traspasa voluntariamente la ley, que combina con el mas fuerte de los castigos.

La de Abril de 1869 se halla precisamente dentro de esas condiciones. Dictada contra criminales de la peor especie, les impone como primera pena la privación de algunas garantías y acaba por privarlos de la mas estimable, imponiéndoles la pena de la vida.

A nadie obliga la ley á que robe ó que plagie: hagase abstracción del criminal, y la ley no pasa de una teoría que examinada como tal, no puede menos que reconocerse como equitativa, por que ella provee al bien general, el que prefiere y con razón al interes particular, no de un individuo cualquiera sino precisamente de uno que conspira y atenta contra aquel interes. Por lo demas, la ley citada no puede menos que atacar las garantías individuales, pues precisamente ese es el objeto de tal ley al suspenderlas y su fin libertarse de la obligación de respetarlas. Pero ella no es una

ley general que comprende á todos, pues no se refiere á mas personas ni es aplicable á otras que á saltadores y plagiarios.

Lo que es sobre estos, no hay un código político que se cure mucho ni poco de concederles garantías. Por esta razón concretándonos al caso presente, el recurso de amparo no puede proceder contra la ley de Abril, por que su objeto ha sido prevenir por medio de su severidad el crimen y su ulterior término castigarlo. Existen á su favor motivos gravísimos de justicia y conveniencia, y siendo una disposición del soberano congreso de la Union, ha estado en su derecho al dictarla.

No me ocupo de la desgraciada situación de los promoventes, que sinceramente deploro, sino de la cuestión jurídica, y esta creo que no puede resolverse á su favor, si se ha de tener en cuenta la legalidad mas que el sentimiento.

En mérito de lo expuesto, el Promotor fiscal pide al juzgado declare no haber lugar al amparo que solicitan los defensores de los reos Atanacio Carrera y Mauricio Victoria, por ser contrario á la ley.

Zaragoza, Junio veinticuatro de mil ochocientos setenta y uno. (firmado). *Eugenio Sanchez.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Puebla de Zaragoza, Agosto nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por los CC. Pedro Carrera y Manuel Jimenez, éste como defensor de Mauricio Victoria, y aquel en representación de su hijo Atanacio del mismo apellido, por haberse juzgado y sentenciado con arreglo á la ley de 9 de Abril de 1870 por la autoridad política del Distrito de Tehuacan ó el telégrama en virtud del que se mandó suspender la ejecución por el primor suplente de este juzgado Lic. Vicente Espinosa y Bandini: el escrito presentado por los quejosos ante

el C. juez de primera instancia del Distrito en que fueron juzgados, por haberse dispuesto que ante él se sustanciara el juicio: lo expuesto por el C. promotor fiscal al desahogar el traslado: las pruebas rendidas: lo alegado dentro del término; y cuanto ha sido de verse y tenerse presente.

Considerando: que principalmente se hace valer por los promoventes para que se les proteja por la justicia de la Union, el que sus defendidos en el angustiado término de tres dias que concede la ley de 9 de Abril de 870 no han podido acreditar sus excepciones, debiendo ser juzgados por las leyes comunes, y por lo tanto han violádose en su perjuicio las garantías que otorga la Constitucion en la primera parte del art. 13 y en los artículos 20 y 21: que la ley porque han sido juzgados solo comprende á los salteadores y plagiarios, y por lo mismo solo para estos deben estar suspensas las garantías que ella expresa: que en esta virtud, en el caso, se hace indispensable el vor si los reos de que se trata se hayan comprendidos en esa ley: que en cuanto á Mauricio Victoria, el delito que le resulta consiste en haberle robado un tercio de chiltepec á Encarnacion, en el camino, terrenos de la hacienda del Carrero: que este hecho no le constituye salteador, supuesto que segun lo criminalistas, con fundamento seguramente de lo que determina la ley 18, tit. 14, part. 7ª, y de lo que asienta Gregorio Lopez en su nota, es tenido por salteador el ladron público y famoso que tiene costumbre de andar en los caminos para robar; que no concurriendo esas circunstancias en él, es fuera de duda que no debe ser reputado por salteador en el sentido legal, y por lo mismo, al no comprenderlo la ley de 9 de Abril y ser juzgado conforme á ella, han violado en su perjuicio las garantías de los artículos de la Constitucion á que se acoge, no pudiéndose pasar desapercibido el tener solo la edad de quince años: que por lo que hace á Carrera, si bien es cierto que ha sujetádose á la expre-

sada ley de Abril por haber pertenecido á la fuerza capitaneada por Felipe y Juan Hernandez, cuyo hecho no ha negado, la que se pronunció en la Sierra de Zongolica mandada por Amador y que ha cometido varios crímenes, tambien lo es que plenamente aparece justificado por los atestados expedidos por los alcaldes de San Bernardino y de San Felipe Maderas, el que no se alistó voluntariamente, sino que fué llevado por la fuerza, sin que hubiera sido de mala conducta: que esto no puede menos, en buen derecho, que favorecerlo y por lo tanto tambien no es de tenerse por comprendido en la ley repetida, habiéndose violado en su perjuicio las garantías que otorgan los artículos de la Constitucion que invoca. Por cuyas consideraciones, y en atencion á lo dispuesto por la primera parte del artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitucion; se declara: que la justicia de la Union ampara y protege á los reos Mauricio Victoria y Atanacio Carrera, por haberse violado en su perjuicio las garantías que otorga la primera parte del artículo 13 y el 20 y 21 de la Constitucion, por el hecho de haber sido juzgados y sentenciados por la autoridad política del Distrito de Tehuacan con arreglo á la ley de 9 de Abril de 1870, sin comprenderles. Hágase saber: publíquese este fallo por los periódicos, y remítase el expediente á la Suprema Corte en cumplimiento de la ley. El C. juez de Distrito definitivamente juzgando lo proveyó, mandó y firmó. Doy fé. —Antonio Rivero.—Ante mí.—Antonio G. Mozqueira.

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Setiembre primero de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Puebla por los

reos Atanacio Carrera y Mauricio Victoria, contra el C. jefe político de Tehuacan, que los condenó á muerte, aplicándoles la ley de 9 de Abril de 1870, expedida contra saltadores y plagiaros: considerando respecto de Mauricio Victoria, que no está probado que sea saltador: considerando respecto de Atanacio Carrera, que si bien no ha negado que perteneció á la fuerza capitaneada por Felipe y Juan Hernandez, la que se pronunció en la Sierra de Zongolica al mando de Amador, consta probado que perteneció á esa fuerza contra su voluntad y obligado por la violencia que para ello se lo hizo: que no se le ha probado que tuviera parte en el plagio del cura de Tehuipango: que tambien consta en el expediente que ha sido de buena conducta, y sobre todo, que tiene quince años de edad, por lo cual, con arreglo á las leyes, no puede imponérsele pena capital: que en consecuencia, aplicar á los quejosos el jefe político de Tehuacan la pena que designa la ley de 9 de Abril de 1870, importa la violacion de las garantías á que se refieren los artículos 13 y 21 de la Constitucion federal; pues el delito que han cometido está sujeto al conocimiento de la justicia ordinaria, la que debe juzgar á Victoria y á Carrera con arreglo á las leyes comunes, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el dia 9 del próximo pasado Agosto por el juez de Distrito de Puebla, que declara: que la justicia de la Union ampara y protege á los reos Mauricio Victoria y Atanacio Carrera, contra el hecho de haber sido juzgados y sentenciados por la autoridad política del Distrito de Tehuacan, aplicando la ley de 9 de Abril de 1870, que no les corresponde.

Devuélvansus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el tomo.

Así lo decretaron por mayoría de votos respecto de Mauricio Victoria, y por una-

nimidad respecto de Atanacio Carrera, los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada. Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lafragua.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—José García Ramirez.—Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, cinco de Setiembre de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México por Félix Espinosa, que cree violadas en su persona las garantías individuales que otorgan los artículos 4º, 5º, 16 y 20 de la Constitucion federal por el coronel del batallon núm. 12 de caballería, que lo obliga á servir en dicho batallon.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor dice: que el C. Félix Espinosa interpuso recurso de amparo, quejándose, de que habiendo sido extraído de la panadería donde trabajaba por el C. Valentin Oñate, teniente del 12 de caballería, á virtud de una falsa acusacion que se le hizo de que era desertor de dicho cuerpo, fué filiado en él contra su voluntad, violándose con este hecho las garantías que otorga la Constitucion en sus artículos 4º, 5º, 16 y 20. Por el informe del C. coronel del cuerpo aparece, que fué cierta la denuncia de que Espinosa era desertor; que por este motivo fué solicitado por el C. Oñate, por el antecedente que tenían en el cuerpo de que habia desertado de él un soldado del mismo nombre y apellido; que persuadido el C. Oñate de que no era el desertor que